

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY
NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.**

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la "Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal", presentada por la Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero del Grupo Parlamentario de Morena, el 29 de octubre de 2019.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1 fracción II; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, los integrantes de esta Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el Dictamen formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

La metodología del presente dictamen atiende al orden de las fases que enseguida se detallan:

- I. En el primer apartado, denominado **"ANTECEDENTES"**, se narran las etapas que ha seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fue presentada la iniciativa hasta su turno a la Comisión para su análisis, estudio y dictaminación.
- II. En el segundo apartado, denominado **"CONTENIDO DE LA INICIATIVA"**, se presentan los argumentos contenidos en la exposición de motivos de la iniciativa y el planteamiento del problema. Además, se agrega un cuadro comparativo del texto vigente con la modificación normativa propuesta.



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL.

EXP. 4543

- III. En el tercer apartado, denominado "**CONSIDERACIONES**", se realiza un análisis de la constitucionalidad y convencionalidad de la propuesta; se estudian los argumentos planteados y la viabilidad jurídica de la modificación normativa, y se establecen los argumentos de la Comisión que sustentan el sentido y alcance del dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de octubre de 2019, la Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
2. En sesión de la misma fecha, mediante Oficio No. D.G.P.L. 64-II-2-1138 y bajo el número de expediente 4543, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Iniciativa de mérito a la Comisión de Justicia para su análisis y la elaboración del Dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

PRIMERO. Planteamiento del problema.

La presente iniciativa considera como práctica discriminatoria y, en consecuencia, violatoria de derechos humanos, la solicitud de constancia de no antecedentes penales a las personas que solicitan un trabajo. Además, los antecedentes penales se han convertido en un estigma institucionalizado, y quienes se encuentran en este supuesto, llevan consigo una marca permanente y simbólica que trasciende al ámbito administrativo.

SEGUNDO. Síntesis de la Exposición de Motivos.

La Diputada promovente expone que, gracias a la reforma constitucional del 10 de junio 2011 en materia de derechos humanos, que generó el reconocimiento por parte del Estado Mexicano de la progresividad de los derechos humanos, a través de la inclusión del principio *pro persona* como un eje rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. En ese sentido, la inclusión de principios como el de no discriminación



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL.

EXP. 4543

tienen como finalidad el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

En otro aspecto, se afirma que, en México, existe una práctica generalizada considerada discriminatoria al solicitar constancia de no antecedentes penales a los aspirantes a un trabajo y la negativa a tramitar o presentar dicha constancia, es motivo suficiente para que les niegue el empleo. Esta práctica constituye una contradicción con el principio de no discriminación, establecido en el artículo 1o de la Constitución; además, de contravenir los principios de reinserción social y de presunción de inocencia que son objeto del sistema de justicia penal acusatorio, pues se castigan hechos pasados y no conductas actuales ni futuras.

Más adentrados en el tema, refiere que los antecedentes penales, forman parte del pasado de la persona y se encuentran dentro de su vida privada. El que se garantice ese derecho a la vida privada, que no se conozcan sus antecedentes penales ante el evidente riesgo a ser discriminado, representa el derecho a la reinserción social efectiva. En ese sentido, a pesar de que existe prohibición constitucional en la aplicación de penas trascendentes por parte de los órganos jurisdiccionales, es claro que esta forma de discriminación administrativa dista mucho de haber sido erradicada y se ha extendido aduciendo cuestiones de seguridad.

Aunado a lo anterior, considera fundamental que el conocimiento de los antecedentes penales debería ser solo personal y familiar, esto con el fin de salvaguardar el derecho a la vida privada, y de consulta de las autoridades para fines de identificación. Sin embargo, se convirtió en los hechos en un trámite obligatorio para ser exhibido frente a terceros; acción que discrimina a las personas y degrada su dignidad, dando por resultado un acto lesivo para los derechos humanos.

Por último, se justifica que los datos de carácter personal referentes a condenas penales que generan un antecedente, deben ser reconocidos como dato personal sensible, con el objetivo de protegerlos. Así, de una interpretación sistemática de la Constitución a los artículos 1o., párrafo tercero, 6o., inciso A, fracción II, y 18., se desprende que el Estado mexicano tiene la obligación de prohibir el uso de los datos personales para fines contrarios a los previstos en los tratados de derechos humanos, así como a crear mecanismos de supervisión y sanción efectivos.



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL.

EXP. 4543

TERCERO. La iniciativa tiene por objeto derogar la expedición de la constancia de antecedentes penales y con ello eliminar toda forma de discriminación. Para ello propone:

1. Establecer que en ningún caso la autoridad administrativa expedirá constancia relativa a los antecedentes penales, salvo en algunos casos en específico;
2. Excluir de los casos derogación cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible; y,
3. Derogar la excepción que se hace en la expedición de las constancias de antecedentes penales respecto de los sentenciados por delitos graves cuando ya han cumplido la pena.

Para ilustrar mejor, la propuesta legislativa se presenta en el siguiente cuadro comparativo:

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL	
TEXTO VIGENTE	MODIFICACIÓN PROPUESTA
Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad I. a III. ... IV. La constancia relativa a los antecedentes penales sólo se podrá extender en los siguientes supuestos: A. y B. ... C. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo,	Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad I. a III. ... IV. En ningún caso la autoridad administrativa expedirá constancia relativa a los antecedentes penales, salvo en los siguientes supuestos: A. y B. ... C. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo,



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL.

EXP. 4543

<p>cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible;</p> <p>D. ...</p> <p>V. Para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales, la información contenida en la fracción I del presente artículo, así como la registrada en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cancelará cuando:</p> <p>A. a F. ...</p> <p>G. La persona sentenciada cumpla con la pena que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada, salvo en los casos de delitos graves previstos en la ley;</p> <p>H. a K. ...</p>	<p>cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada.</p> <p>D. ...</p> <p>V. Para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales, la información contenida en la fracción I del presente artículo, así como la registrada en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cancelará cuando:</p> <p>A. a F. ...</p> <p>G. La persona sentenciada cumpla con la pena que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada;</p> <p>H. a K. ...</p>
---	--

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. COMPETENCIA. Esta Comisión de Justicia es competente para conocer y dictaminar este asunto de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 39, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 80, numeral 1, fracción II y el artículo 157, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados.



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL.

EXP. 4543

SEGUNDA. JUSTIFICACIÓN. Esta Comisión coincide con la promovente en la importancia del problema planteado, pues el artículo 18 constitucional en su segundo párrafo señala que:

"El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto."

Esta redacción fue producto de las reformas constitucionales del 18 de junio de 2008 y del 10 de junio de 2011, en las cuáles el Constituyente Permanente, tuvo la necesidad de realizar tales modificaciones con tal de que fueran adecuadas a lo estipulado por los tratados internacionales que el Estado Mexicano es parte en materia de derechos humanos, en otras palabras, los cambios resultaron básicamente en: 1) La sustitución del término "readaptación" por "reinserción"; 2) El abandono del término "delincuente"; 3) La inclusión del fomento al respeto por los derechos humanos, como medio para lograr la reinserción; 4) La inclusión de un objetivo adicional a "lograr la reinserción", a saber: "procurar que la persona no vuelva a delinquir"; y, 5) La adición del concepto "beneficios" como parte de la lógica del sistema penitenciario¹, bajo este argumento, al dejar arbitrio a que si se considera necesario más no justificado la solicitud de antecedentes penales, contraviene a todas luces el principio en comento, toda vez que se genera una restricción que lesiona el derecho fundamental al trabajo.

Cabe señalar que, el principio de progresividad de los derechos humanos exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.²En este sentido, se traduce en que el legislador queda vinculado a ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos, y el aplicador

¹ REINSERCIÓN SOCIAL. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Primera Sala, Décima Época, Tesis Aislada (Constitucional Penal), registro 2012511.

² PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. Segunda Sala, Décima Época, Jurisprudencia, registro 2019325.



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL.

EXP. 4543

de las normas queda obligado a interpretarlas de manera que se amplíen en lo jurídicamente posible, por lo que están impedidos para emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y tutela previamente reconocido a algún derecho humano, así como que su interpretación implique desconocer la extensión y nivel de tutela admitidos con anterioridad³.

Bajo esta tesitura, se debe analizar a fondo el alcance de la constancia de antecedentes penales, las repercusiones negativas hacia el principio de reinserción social, el cual debe garantizarse en todo momento si se ha de transitar hacia un Estado democrático de derecho.

TERCERA. Uno de los grandes pendientes del Estado Mexicano en materia de derechos humanos es la eliminación de toda forma de discriminación, actos que aún se siguen presentando en nuestro sistema jurídico. Por ejemplo, una de las principales causas de discriminación ocurre en el ámbito laboral, y consiste en solicitar, como requisito esencial para la contratación, una constancia que manifieste si la persona candidata cuenta o no con antecedentes penales. El reclutador o empresario consideran que tener tales antecedentes es un indicador de posible mal comportamiento y que genera desconfianza al momento de tomar la decisión de contratar a personas con este estigma. Sin embargo, tales determinaciones discriminatorias se ocultan bajo el argumento de la libertad de contratación, incluso se tiene la creencia que estas personas que han sido procesadas penalmente son menos honestas y fiables. Sin embargo, se cree que la discriminación laboral es mayor no por el hecho de tener antecedentes penales, sino indirectamente por el hecho de haber estado en prisión⁴.

Bajo esta tesitura, el manejo que hoy en día se le da a los antecedentes penales de las personas es discriminatorio, puesto que las segrega y estigmatiza por la

³ PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN SU MODALIDAD DE NO REGRESIVIDAD. RESULTA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA PARA EL APLICADOR DE LA NORMA AL DEFINIR EL CONFLICTO DE LEYES PARA EL DISTRITO FEDERAL –AHORA CIUDAD DE MÉXICO– QUE PREVÉN DISTINTOS PLAZOS PARA LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD EN MATERIA FISCAL. Plenos de Circuito, Décima Época, Jurisprudencia, registro 2018186.

⁴ LARRAURI, Elena. Reinserción laboral y antecedentes penales. En *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología* (en línea). 2011, núm. 13-09, p. 09:1-09:25. Disponible en internet: <http://criminet.ugr.es/recpc/13/recpc13-09.pdf> ISSN 1695-0194



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL.

EXP. 4543

comisión de algún delito, quienes finalmente han cumplido su pena y por tal motivo es que buscan darle un cauce legal a su vida y ser aceptados de nueva cuenta por la sociedad, sólo que al ser rechazados por ésta, les impone una “doble sanción”, la cual obstaculiza su desarrollo y reinserción social, generándose una injustificada categorización. En este sentido, el principio de la reinserción social permite que una persona que ha cometido un delito pueda, en determinado tiempo, volver a ser un elemento activo de la sociedad. Sin embargo, aquellas personas que han vivido la condición de una sentencia que le condene a la pérdida de su libertad y transiten hacia la recuperación del goce pleno de sus derechos, buscan que la sociedad les acepte y puedan acceder a otra oportunidad.

Por lo anterior, esta Comisión considera que todo empleo debe ceñirse a lo establecido en el artículo 5º constitucional, el cual tutela la a la libertad de las personas de realizar cualquier oficio o profesión sin cumplir más condiciones que las relativas a que se trate de una actividad lícita, que no se afecten derechos de terceros o se ofendan los derechos de la sociedad. Sin bien, existe una distinción a favor del Estado al solicitar dicha constancia relativa a los antecedentes penales, se justifica en el sentido que se hallan inmersos en una actividad relativa a un servicio público, pues el Estado las considera necesarias para asegurar intereses sociales, respecto a los particulares, y con excepción de los servicios de seguridad privada, es inconstitucional e impermissible solicitar como requisito dicha constancia.

Por ello, esta Comisión considera viable suprimir la porción normativa “así como cuando por la naturaleza del empleo” establecida en el artículo 27, fracción cuarta, inciso C, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues abre la posibilidad que cualquier persona empleadora la solicite como condicionante en el otorgamiento de un empleo.

CUARTA. Otro de los aspectos a considerar de la propuesta en estudio, es la relacionada a la solicitud de la constancia relativa a los antecedentes penales cuando por razones de interés público sea exigible. López Calera⁵ señala que, el interés público pretende dar significado a un catálogo de objetivos de orden jurídico

⁵ LÓPEZ CALERA, Nicolás. El interés público: entre la ideología y el derecho. En *Anales de la Cátedra Francisco Suárez* (en línea). 2010 núm. 44, págs. 123-148. Disponible en <https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/502/592>



CÁMARA DE
DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL.

EXP. 4543

y político de un Estado democrático. Y afirma que se trata de un concepto jurídico difuso, abstracto e indeterminado que lleva consigo comúnmente los riesgos de la confusión y de la manipulación. Aunque *prima facie* está claro que el interés público es sinónimo de un interés general que debe ser protegido con preferencia sobre los intereses particulares, sin embargo, cuando hay que determinarlo en un conflicto concreto, la tarea resulta muy difícil y surgen diversas y contradictorias interpretaciones de lo que ese interés público puede exigir⁶.

Es así, que, al no existir una concepción exacta de tal concepto jurídico, su aplicación es dubitativo por lo que su uso sin racionalización se justifica en la aplicación de las normas que se someten a este concepto. Además, "interés público" está asociado a un orden funcional, pues sirve para justificar diversas formas de intervención del Estado en la esfera de los particulares previendo límites o cargas a éstos.

En relación con esto, las actuaciones de las autoridades se deben regir en todo momento bajos los principios de igualdad y de respeto a la libertad individual, la igualdad debe entenderse a que todo trato debe llevarse a cabo sin discriminación o de concesión de privilegios arbitrarios, hipótesis que no se cumple con el concepto en estudio. Por último, existe suficiente margen para que las autoridades soliciten la constancia relativa a los antecedentes penales, tanto los incisos A y C en su primera parte, cumplen a cabalidad las situaciones sobre la procedencia de tal solicitud, además que con ello se garantiza el respeto a los derechos fundamentales al no utilizar conceptos jurídicos indeterminados para justificar una actuación del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia, estimamos **procedente aprobar en sus términos** la "Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal", por lo que sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

⁶ *Ibídem.*



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL.

EXP. 4543

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.

Artículo Único. Se reforman los numerales C de la fracción IV y G de la fracción V, y la fracción IV del artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como sigue:

Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad

...

I. a III. ...

IV. En ningún caso la autoridad administrativa expedirá constancia relativa a los antecedentes penales, salvo en los siguientes supuestos:

A. y B. ...

C. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones **educativas**, de seguridad pública o privada;

D. ...

V. ...

A. a F. ...

G. La persona sentenciada cumpla con la pena que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada;

H. a K. ...



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL.

EXP. 4543

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero de 2020.



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL.

EXP. 4543








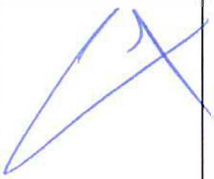


NO	FOTOGRAFIA	NOMBRE:	A FAVOR	EN CONTRA:	ABSTENCIÓN
1		MA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ Presidenta			
2		DIP. RUBÉN CAYETANO GARCÍA Secretario			
3		DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS Secretaria			
4		DIP. DAVID ORIHUELA NAVA Secretario			
5		DIP. CLAUDIA PÉREZ RODRÍGUEZ Secretaria			
6		DIP. MARTHA PATRICIA RAMÍREZ LUCERO Secretaria			

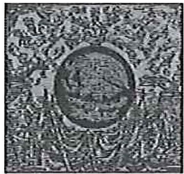


**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL.

EXP. 4543


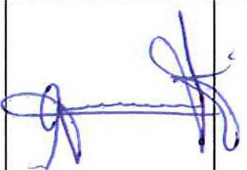

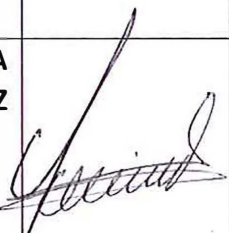

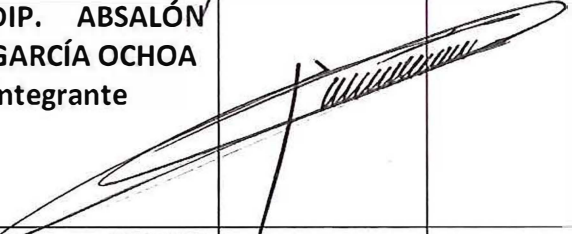



NO	FOTOGRAFIA	NOMBRE:	A FAVOR	EN CONTRA:	ABSTENCIÓN
7		DIP. MARIANA DUNYASKA GARCÍA ROJAS Secretaria			
8		DIP. MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS Secretaria			
9		DIP. MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN Secretaria			
10		DIP. ANA RUTH GARCÍA GRANDE Secretaria			
11		DIP. JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR Secretario			
12		DIP. VERÓNICA JUÁREZ PIÑA Integrante			



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL.

EXP. 4543

NO	FOTOGRAFIA	NOMBRE:	A FAVOR	EN CONTRA:	ABSTENCIÓN
13		DIP. ARMANDO CONTRERAS CASTILLO Integrante			
14		DIP. MARÍA ELIZABETH DÍAZ GARCÍA Integrante			
15		DIP. ABSALÓN GARCÍA OCHOA Integrante			
16		DIP. EDGAR GUZMÁN VALDÉZ Integrante			
17		DIP. MARCO ANTONIO GÓMEZ ALCANTAR Integrante			
18		DIP. MARÍA ROSELIA JIMÉNEZ PÉREZ Integrante			



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL.

EXP. 4543




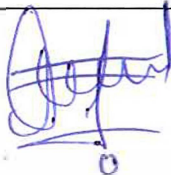





NO	FOTOGRAFÍA	NOMBRE:	A FAVOR	EN CONTRA:	ABSTENCIÓN
19		DIP. JOSÉ ELÍAS LIXA ABIMERHI Integrante			
20		DIP. MARÍA TERESA LÓPEZ PÉREZ Integrante			
21		DIP. LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ VENTURA Integrante			
22		DIP. MARCO ANTONIO MEDINA PÉREZ Integrante			
23		DIP. ENRIQUE OCHOA REZA Integrante			
24		DIP. ESMERALDA DE LOS ÁNGELES MORENO MEDINA Integrante			



**CÁMARA DE
DIPUTADOS**
LXIV LEGISLATURA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY NACIONAL DE
EJECUCIÓN PENAL.

EXP. 4543

NO	FOTOGRAFIA	NOMBRE:	A FAVOR	EN CONTRA:	ABSTENCIÓN
25		DIP. XIMENA PUENTE DE LA MORA Integrante			
26		DIP. NANCY CLAUDIA RESÉNDIZ HERNÁNDEZ Integrante			
27		DIP. RUBÉN TERÁN ÁGUILA Integrante			
28		DIP. GUSTAVO CALLEJAS ROMERO Integrante			
29		DIP. MARÍA LUISA VELOZ SILVA Integrante			
30		DIP. SILVIA LORENA VILLAVICENCIO AYALA Integrante	